

De: notificaciones@legalgroup.com.co
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2024 2:45 p. m.
Para: 'cldisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co'
Asunto: Reclamación administrativa - Derecho de petición - Beatriz Andrea Blanco Ospina
Datos adjuntos: RECL. ADMINISTRATIVA.pdf; ANEXO 1. PODER.pdf; ANEXO 2. CERTIF. EXIST. REP. LEG..pdf

Doctora

CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA

Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca

Referencia: Reclamación administrativa - Derecho de petición

Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813, y portador de la tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de Legalgroup Especialistas en Derecho SAS, con NIT 900.998.405-7 (anexo certificado), persona jurídica que actúa en calidad de apoderada^[1] de la señora Beatriz Andrea Blanco Ospina, identificada con cédula de ciudadanía 38.794.218; en los términos del poder legalmente conferido y con las facultades en él otorgadas, a través de este escrito y de manera respetuosa presento derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y reglamentado por la Ley 1755 de 2015, para lo cual se expondrá lo mencionado en el documento adjunto.

Nota: Por favor revisar documentos adjuntos y confirmar lo recibido.

Atentamente,

JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA

Representante Legal - Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S.

Cédula de ciudadanía 1.116.238.813

Tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura

Revisó COQ

Envío DH

^[1] Artículo 75 C.G.P.: “[...] Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso [...]”



Doctora

CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA

Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca
cldisajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Reclamación administrativa - Derecho de petición

Jonathan Velásquez Sepúlveda, identificado con cédula de ciudadanía 1.116.238.813, y portador de la tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de representante legal y profesional del derecho inscrito en el certificado de existencia y representación legal de Legalgroup Especialistas en Derecho SAS, con NIT 900.998.405-7 (anexo certificado), persona jurídica que actúa en calidad de apoderada¹ de la señora Beatriz Andrea Blanco Ospina, identificada con cédula de ciudadanía 38.794.218; en los términos del poder legalmente conferido y con las facultades en él otorgadas, a través de este escrito y de manera respetuosa presento derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y reglamentado por la Ley 1755 de 2015, para lo cual se expondrán los siguientes:

1. Hechos

1.1. El legislador a través de la Ley 4^a de 1992² ordenó al Gobierno Nacional nivelar la remuneración percibida por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial³, atendiendo criterios de equidad.

1.2. Teniendo en cuenta la reticencia del Gobierno Nacional a dar cumplimiento a lo ordenado en la norma referida previamente, los empleados y funcionarios de la Rama Judicial se vieron en la necesidad de pronunciarse a través de tres ceses de actividades en los años 2006, 2008, y finalmente en el segundo semestre del año 2012.

1.3. Con ocasión del último cese de actividades, una vez surtidas las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación reunidos en asociaciones y corporaciones, el día 6 de noviembre de 2012, se suscribió acta⁴ en la cual se acordó "[...] *Reconocer el Derecho a los Funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4^a de 1992, atendiendo criterios de equidad.* [...]"⁵

¹ Artículo 75 C.G.P.: "[...] Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. Igualmente **podrá otorgarse poder a una persona jurídica** cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento, podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma. Las Cámaras de Comercio deberán proceder al registro de que trata este inciso [...]"

² "[...] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política [...]"

³ *Incluidos los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación como lo predica el inciso 3° artículo 249 de la Constitución Política de Colombia, Título VIII. De la Rama Judicial. Capítulo 6. De la Fiscalía General de la Nación. (...) La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal"*

⁴ "[...] ACTA DE ACUERDO SUSCRITA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA (SIC) DE COLOMBIA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y FISCALIA (SIC) GENERAL DE LA NACION (SIC) [...]"

⁵ El Acuerdo en mención no fue suscrito por el Fiscal General de la Nación, ni por el representante de los empleados de dicha Fiscalía, ni por el representante de los empleados de los juzgados civiles, ni por el representante de los empleados de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, ni por el representante de los empleados de los juzgados administrativos y tampoco por el representante de los fiscales.



1.4. En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió, entre otros, los Decretos 383⁶ y 384⁷ del 6 de marzo de 2013, mediante los cuales creó una bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, de la Justicia Penal Militar, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, indicando que las mismas serían reconocidas a partir del 1° de enero de 2013 en forma **mensual, permanente y periódica**.

1.5. Frente a lo anterior cabe resaltar que dentro de la mencionada acta⁸ únicamente se acordó nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, pero en ninguno de sus apartes se establecieron las condiciones bajo las cuales se haría y mucho menos que la solución que se le daría contraviniera los derechos laborales de estos, surgiendo el interrogante de cómo pretendía el Gobierno Nacional efectuar una nivelación salarial a través de la creación de una bonificación judicial sin que esta constituya factor salarial para todos los efectos legales, contrariando así los lineamientos trazados por el legislador en la Ley 4ª de 1992.

1.6. Resulta insensata la intención del Gobierno al crear una bonificación judicial que desdibuja el objetivo del acuerdo al que se llegó con los representantes de algunos servidores públicos, pues la intención era nivelar salarialmente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial con todas las prerrogativas que ello implica y no una distribución acomodada del dinero aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de una ficción legal abiertamente inconstitucional, como en efecto se hizo. La figura elegida no se erige en una nivelación salarial y por ello el reconocimiento no podía hacerse con aplicación de condiciones discriminantes.

1.7. El mandato ordenado en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no se desarrolló por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 383⁹ y 384¹⁰ de 2013, con fundamento en el criterio de equidad por las siguientes razones elementales:

- Se estableció una bonificación judicial sin carácter prestacional para todos los efectos legales, desconociendo el carácter salarial que ostenta y los criterios y objetivos determinados para ejecutar una nivelación salarial.
- Se estableció una bonificación judicial únicamente para el personal que se encuentra activo, excluyendo al personal que se encontrara inactivo por cualquier razón legal como los son las licencias e incapacidades, entre otras.
- Se estableció que la bonificación judicial será incrementada con base en el IPC y no con en el porcentaje que establezca el Gobierno para el aumento

⁶ Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

⁷ Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

⁸ “[...] ACTA DE ACUERDO SUSCRITA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y FISCALIA (SIC) GENERAL DE LA NACION (SIC) [...]”

⁹ Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

¹⁰ Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.



salarial de los servidores de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación.

1.8. La Rama Judicial no otorga el carácter de factor salarial a la bonificación judicial creada mediante los Decretos 383 y 384 de 2013, razón por la cual no la tiene en cuenta al momento de liquidar las prestaciones a favor de mi representada, afectando así sus ingresos económicos.

1.9. Pese a que los Decretos 383 y 384 de 2013, aún se hallan amparados por la presunción de legalidad, puesto que no han sido suspendidos o anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la Rama Judicial debe **inaplicar bajo la excepción de inconstitucionalidad** la expresión¹¹ contenida en el artículo 1.º de los decretos en mención, que le da a la bonificación judicial el carácter de factor salarial **únicamente** para cotizar al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, desconociendo con ello la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Colombia que forman parte del bloque de constitucionalidad, el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes, así como la jurisprudencia reiterada de las altas Cortes y los lineamientos trazados por la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, los cuales son claros al señalar que las sumas percibidas por un trabajador como retribución de sus servicios de forma mensual, permanente y periódica deben constituir factor salarial para todos los efectos legales.

1.10. El Decreto 383¹² de 2013 fue modificado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024; mientras que el Decreto 384¹³ de 2013 fue modificado mediante los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

2. Peticiones

De manera atenta acudo ante la entidad que usted dignamente representa para solicitarle que frente a mi poderdante:

2.1. Se **inaplique bajo la excepción de inconstitucionalidad** la siguiente expresión: “[...] y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud [...]”, contenida en el inciso primero del artículo 1.º de los Decretos 383 del 6 de marzo de 2013,¹⁴ modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024; y 384 del 6 de marzo de 2013,¹⁵ modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024, así como los que sean

¹¹ “[...] y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud [...]”

¹² Modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

¹³ Modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016, 1016 de 2017, 342 de 2018, 994 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 1581 de 2023 y 299 de 2024.

¹⁴ “[...] Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar [...]”

¹⁵ “[...] Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones. [...]”



expedidos por el Gobierno Nacional con posterioridad y mientras se siga limitando el carácter salarial de la bonificación judicial para todos los efectos legales y prestacionales.

2.2. Como consecuencia de lo anterior se reconozca que la bonificación judicial constituye factor salarial para liquidar todas las prestaciones devengadas **y las que se causen a futuro.**

2.3. Ordénese pagar con efectos retroactivos a favor de mi poderdante las sumas que resulten como diferencia de la reliquidación de las prestaciones devengadas por ella con la inclusión de la bonificación judicial como factor salarial, desde el 1.º de enero de 2013 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago.

2.4. Que las sumas que resulten a favor de mi poderdante sean indexadas según el índice de precios al consumidor, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, desde el 1.º de enero de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago.

Así mismo, solicito a su despacho que se **certifique** lo siguiente respecto de mi poderdante:

- Nombre completo e identificación de la servidora.
- Cargos desempeñados a partir del 1º de enero de 2013 y hasta el momento de respuesta de la presente petición, **indicando las fechas de inicio y de terminación en cada uno de los cargos desempeñados.**
- Asignación salarial percibida mes a mes, discriminando conceptos y valores de pago e incluyendo la “bonificación judicial asignada” y su valor para cada empleo desempeñado.
- Factores salariales que fueron tenidos en cuenta al momento de efectuar las liquidaciones de cada una de las prestaciones sociales.
- En caso que mi poderdante ya no se encuentre vinculada en la entidad o transitoriamente se hubiese retirado del servicio y se perdiera la continuidad en sus labores, **certificar** fecha de terminación definitiva o transitoria de los vínculos laborales y **anexar** constancias de pago de liquidación definitiva con discriminación de conceptos y valores pagados incluido pagos de cesantías e intereses de las mismas.

Nota aclaratoria: Se deberá tener en cuenta el tiempo laborado por mi poderdante en otras ciudades del país (si ello ha ocurrido), razón por la cual se solicita que en caso que esta seccional no pueda expedir las certificaciones solicitadas remita en los términos del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, copia de esta petición a la(s) seccional(es) correspondiente(s) para lo de su competencia.

Amablemente solicito se allegue como soporte documental lo siguiente:

- **Certificación** donde se indiquen y especifiquen todas y cada una de las prestaciones devengadas por la servidora pública de la Rama Judicial.



- **Certificación** en la que se indique y discrimine cuáles son los factores salariales que se tienen en cuenta al momento de liquidar las prestaciones de la servidora pública de la Rama Judicial, de acuerdo a su cargo y pago mensual, desde el 1.º de enero de 2013 a la fecha.
- Copia de la resolución de nombramiento y acta de posesión de mi poderdante en cada uno de los cargos desempeñados, desde el 1º de enero del 2013 a la fecha de respuesta de la presente petición; así mismo, aquellas resoluciones que aceptan renuncias o que dan por terminadas las relaciones laborales en cada cargo ocupado (cuando a ello se hubiese dado lugar).
- En caso que los reconocimientos, liquidaciones y pagos de alguna(s) prestación(es) estén precedidas de un acto administrativo, solicito se sirva allegar copias de los mismos con las fechas y constancias de efectivamente haberse pagado a nombre de mi poderdante desde el 1.º de enero de 2013 a la fecha.
- Copias de los desprendibles de nómina de mi poderdante mes a mes desde el 1º de enero de 2013 hasta la fecha de respuesta a la presente petición.

El suscrito pagará los dineros que se tornen necesarios para la expedición de la documentación requerida, lo cual se deberá informar por parte de la Rama Judicial a la dirección de notificación o teléfonos aquí enunciados.

3. Fundamentos jurídicos

El legislador a través de la Ley 4ª de 1992¹⁶ ordenó al Gobierno Nacional nivelar la remuneración percibida por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial atendiendo criterios de equidad.

Posteriormente y en virtud del acta¹⁷ suscrita el 6 de noviembre de 2012, el Gobierno Nacional reconoció a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación el derecho a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la mencionada ley, razón por la cual expidió, entre otros, los Decretos 383 y 384 de 2013, mediante los cuales se creó una bonificación judicial así:

El Decreto 383 de 2013 “[...] *Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones* [...]”, al crear tal emolumento estableció lo siguiente:

“[...] **ARTÍCULO 1.** Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente

¹⁶ “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”

¹⁷ “ACTA DE ACUERDO SUSCRITA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA (SIC) DE COLOMBIA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y FISCALIA (SIC) GENERAL DE LA NACION (SIC)”



factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año al valor que se fija en las siguientes tablas, así: [...].
(Negritas y subrayado fuera del texto original)

Así mismo, el Decreto 384 de 2013 “[...] Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial y se dictan otras disposiciones [...]”, al crear tal emolumento estableció lo siguiente:

“[...] **ARTÍCULO 1.** Créase para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1° de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca vinculado al servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla, así: [...].

De lo anterior se colige que la bonificación judicial como herramienta escogida por el Gobierno Nacional para nivelar salarialmente a los servidores públicos de la Rama Judicial, de la Justicia Penal Militar, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, constituiría factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, pero no al momento de liquidar las prestaciones devengadas por los mismos.

Ahora, resulta muy importante resaltar que la Ley 4ª de 1992 determina en su artículo 1.º que el régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo sus disposiciones y las de los decretos que para su desarrollo dicte el Gobierno Nacional carecen de efecto y no crearán derechos; por tanto, la Rama Judicial al no darle connotación salarial a una bonificación judicial creada con base en los principios de dicha ley, desnaturaliza los efectos reales para la cual fue creada, excediéndose así en su facultad de reglamentación, desbordando y violando claros preceptos de índole supranacional, teniendo en cuenta que está desconociendo la esencia misma del concepto de salario, el cual por definición es lo que el empleado recibe como retribución de sus servicios habitual y periódicamente prestados.

Si bien el Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 puso fin al conflicto suscitado entre el Gobierno Nacional y los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación respecto de la nivelación salarial, lo cierto es que, como lo expresó el Consejo de Estado,¹⁸ esto no impide que quienes se encuentren inconformes con el mecanismo adoptado para dar cumplimiento a lo acordado entre las partes, hagan uso de las herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos; entre estas, cuestionar la legalidad de los actos administrativos de nivelación salarial

¹⁸ Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, sentencia del 28 de febrero de 2013, radicación 25000-23-25-000-2012-01675-01(AC), actor: Rosse Maire Cepeda, demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, **no sin antes darle la oportunidad a la administración de revisar las decisiones que esta ha adoptado frente al pago de la bonificación judicial.**

La bonificación judicial al constituir únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud, contraría lo dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo en atención a la limitación sobre la cual recae, pues dicho artículo establece lo siguiente: “[...] *Elementos integrantes. **Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones [...]***”.

La Corte Constitucional en sentencia C-521 de 1995 dispuso que “[...] **Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio**, es decir, no a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, ni las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando por disposición expresa de las partes no tienen el carácter de salario, con efectos en la liquidación de prestaciones sociales [...]”. (Negrillas propias)

Una vez analizado lo anterior, habrá de entenderse que la llamada bonificación judicial es una contraprestación al trabajo desarrollado por los servidores de la Rama Judicial del Poder Público y de la Fiscalía General de la Nación, la cual se paga en forma mensual; por lo tanto, según lo dispuesto en la legislación laboral, los preceptos constitucionales y los convenios internacionales ratificados por Colombia, esos rubros constituyen salario para todos los efectos legales y no como lo dispuso el Gobierno a través de los Decretos 383 y 384 del 6 de marzo de 2013.

En este orden de ideas se considera que la Rama Judicial está vulnerando una norma de rango supranacional como lo es el Convenio 95 de 1949 de la OIT (sobre la protección al trabajo), aprobado por la Ley 54 de 1962, el cual determina: “[...] *A los efectos del presente convenio, el término "salario" significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que se pueda evaluar en efectivo, fijado por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, **por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar** (artículo 1.º) [...]*”. (Resaltado fuera del texto original)

Respecto al alcance de los convenios internacionales, la sentencia C-401 de 2005¹⁹ por medio de la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 19 de Código Sustantivo del Trabajo, estableció la obligación de integrar a nuestro ordenamiento

¹⁹ Sentencia C-401 del 4 de abril de 2005. Corte Constitucional. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 19 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo. Referencia: expediente D-5355. Demandante: Carlos Ernesto Molina. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA



los convenios debidamente ratificados por nuestro país en aplicación del bloque de constitucionalidad, estableciéndose en dicha providencia lo siguiente:

“[...] Si, como lo ordena la Constitución, los derechos y deberes allí consagrados deben ser interpretados "de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia"(art. 93), y "Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna" (art. 53 inc. 4), las autoridades nacionales de todos los órdenes (el Gerente de las Empresas Varias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Jueces de la República) cometieron un grave error : ignoraron el derecho aplicable ; en su lugar, escogieron normas desfavorables a los trabajadores, contrarias a la Constitución y a los deberes internacionales que el Estado se comprometió a cumplir.”

“Así, queda aclarado que el bloque de constitucionalidad se construyó para interpretar las normas que fijan el alcance de los derechos comprometidos en este caso, y el de la protección que les brindan, tanto las normas internacionales como los convenios incorporados a la legislación nacional, según lo establece el artículo 53 Superior.”

“Es decir, el bloque de constitucionalidad se usó para los fines precisos que señala el artículo 93 de la Carta Política: para interpretar el alcance de los derechos consagrados en ella "de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia". Y los Convenios 87 y 98 son parte de la legislación interna en cuanto fueron debidamente ratificados (C.P. art, 53), por lo que son normas aplicables en cuya interpretación deben los jueces atender el criterio de los órganos de la OIT que son sus intérpretes legítimos y autoridades competentes para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.”

“A partir de las anteriores decisiones, se puede apreciar que los convenios internacionales del trabajo han sido invocados como elementos de juicio en distintas sentencias de la Corte Constitucional sobre asuntos laborales. En varias providencias se ha mencionado expresamente que los convenios forman parte del bloque de constitucionalidad [...]”. (Resaltado fuera del texto original).

Igualmente, en dicha sentencia se dejó establecido el carácter normativo obligatorio de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, así:

“[...] No ofrece ninguna duda que todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia fueron integrados a la legislación interna, por disposición expresa del inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución. Esto significa que, de manera general, todos estos convenios adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación, sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico en el ordenamiento jurídico del país o para desarrollarlo.

Adicionalmente, aquellos convenios que integran el bloque de constitucionalidad han de ser aplicados por todas las autoridades y los particulares para asegurarse de que las leyes nacionales sean interpretadas de manera acorde con la Constitución y tales convenios. Por lo tanto, al resolver “el caso controvertido” – en los términos del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo acusado en el presente proceso-, tales convenios son norma aplicable de manera principal y directa, y han de incidir en la determinación del alcance de las normas legales que también sean aplicables. Adicionalmente, los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto han de prevalecer en el orden interno (C.P., art.



93, inc. 1), lo cual ha de ser reconocido y respetado al resolver “el caso controvertido.”

*Así, en la parte resolutive se declarará la constitucionalidad de la expresión demandada, pero se excluirá la interpretación que pueda llevar a que los convenios de la OIT ratificados por Colombia, tengan carácter supletorio. Estos, al incorporarse a la legislación interna (art. 53), son fuente principal y son aplicables directamente para resolver las controversias. Además, es importante recalcar que los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato orientan la interpretación de la norma suprema, y que aquellos convenios que forman parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el orden interno. Así habrán de valorarlos especialmente los jueces y los funcionarios administrativos [...]”.*²⁰

El aparte cuestionado de los Decretos 383 y 384 de 2013 debe ser inaplicable bajo la **excepción de inconstitucionalidad**, en atención a que además de violar el articulado de la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas concordantes, no está acorde con los tratados internacionales que fueron ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad bajo los cuales el Estado se comprometió a respetar la dignidad humana y el derecho al trabajo.

Aunado a lo anterior y en virtud del artículo 93²¹ de la Constitución Política de Colombia, es necesario acudir a instrumentos de derecho internacional que desarrollan materias laborales y conforman la normatividad *ius fundamental* vigente, como por ejemplo:

- La Convención Americana de Derechos Humanos²² aprobada en el orden interno mediante Ley 16 de 1972, que en su artículo 26 habla del desarrollo progresivo.
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”,²³ aprobada mediante Ley 319 de 1996.
- Los Convenios 95²⁴ y 100²⁵ de la OIT sobre la igualdad de remuneración y protección del salario.

La jurisprudencia constitucional ha definido lo siguiente:

“[...] la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber, en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales.

²⁰ Ibidem

²¹ “[...] ARTÍCULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. [...]”

²² Convención Interamericana de Derechos Humanos: Artículo 26- Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

²³ Protocolo de San Salvador: Artículo 7: “[...] Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo - Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales [...]”

²⁴ Convenio relativo a la protección del salario (Entrada en vigor: 24 septiembre 1952).

²⁵ Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953)



En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política [...]”²⁶

La Rama Judicial al desconocer dichas prerrogativas quebranta el bloque de constitucionalidad porque los derechos invocados a favor de mi poderdante son producto de una orden legal y constitucional cuya inobservancia atenta contra el principio de progresividad.

De no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, para el caso planteado, la entidad violaría los estatutos internacionales referidos porque al desconocer un derecho que se encuentra fijado en la Ley 4ª de 1992, entre otras normas legales y constitucionales, vulnera sus derechos a la protección del salario por parte del empleador y la discrimina, lo cual es palmariamente violatorio del derecho fundamental de mi prohijada.

Conforme lo expuesto y según el principio ***pacta sunt servanda***, las normas de derecho interno deben ser interpretadas de manera que armonicen con las obligaciones internacionales del estado colombiano; por tal razón, al estar el aparte cuestionado de los Decretos 383 y 384 de 2013, desenfocado de los tratados internacionales sobre derechos humanos y aspectos laborales, violan esta normatividad internacional.

Al respecto la Corte Constitucional ha referido:

“[...] Este principio de Pacta sunt servanda, según el cual los tratados deben ser cumplidos por las partes que se obligaron, constituye la base esencial del derecho de los tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin presuponer una norma como Pacta sunt servanda, por lo cual ella es sin lugar a dudas uno de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (CP art. 9º) [...]”²⁷

Por esta razón es importante reiterar que la Convención de Viena contempla el principio del ***pacta sunt servanda*** y, por ende, los Estados no pueden incumplir las normas de carácter nacional, internacional y constitucional, so pretexto de aplicar una norma de estirpe interna, ya que no puede el trabajador tener desmejoras ni ser discriminado de ganancias que obtiene producto de la prestación de sus servicios.

En lo relacionado con el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, previa inaplicación por inconstitucionalidad de la normatividad vigente por desconocer el bloque de constitucionalidad, resulta bastante explícita la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala de Conjuces- del 31 de agosto de 2016, con ponencia de la doctora María Isabel Vanegas Arias,²⁸ que a la letra reza:

²⁶ Sentencia SU132/13 Referencia: expediente T-3.536.944

²⁷ Sentencia C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

²⁸ Radicado: 05 0013331 031200800041 01 NI 2010-2014, María Elena Gaviria Cardona, Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho - Laboral.



“[...] Se reitera que **para la Sala no se evidencian criterios que denoten razonabilidad en la decisión de restarle el "carácter salarial" a la bonificación.** Dicho carácter se le ha reconocido a otras formas de remuneración que han sido ampliamente debatidas en los Tribunales, así como ocurre con la norma que dispuso que **la bonificación por actividad judicial sí se tiene como de carácter salarial para efectos de liquidación de la pensión de jubilación.** Y no existe razonabilidad en la adopción de dicho criterio, es decir el que solo por excepción y para los efectos antes mencionados se le considere como factor salarial, **lo que da por conclusión lógica que al contravenir normas superiores contenidas en los tratados Internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en materia laboral, habrá de entenderse la inaplicabilidad de tal restricción.**

Es de tener en cuenta que para esta Sala de Decisión es incuestionable que la actividad legislativa en materia laboral no puede apartarse de los Principios que inspiran esta materia. **Se parte de la premisa de que ni siquiera al legislador le está dado cambiar la naturaleza de las cosas, máxime cuando con ello se aparta de conceptos clara e indiscutiblemente reconocidos en tratados internacionales como son los relativos al de salario.**

Como Principios Constitucionales Mínimos del Trabajo se consideran los que han adoptado los Tratados internacionales, que integran el bloque de constitucionalidad. Otros mas no pueden desestimarse en tanto se entiende que la jurisprudencia laboral en su desarrollo y evolución, debe propender por la real y efectiva protección de los derechos laborales económicos constitucionalmente previstos. Ellos son: El de la condición más beneficiosa para el trabajador, que se encuentra garantizada mediante el principio de favorabilidad en materia laboral, el principio in dubio pro operario en virtud del cual norma se aplicará según aquella interpretación que le sea más favorable al trabajador; el principio de progresividad en derechos sociales que establece límites del legislador, aunque la prohibición de retrocesos es a veces posible, es decir no es absoluta como sucede cuando no se está frente a derechos adquiridos.

En síntesis, **la Constitución hace del trabajo no sólo un derecho fundamental, sino que además éste es un principio y valor del ordenamiento, por lo cual el Estado tiene el deber de protegerlo especialmente (Constitución Política, artículos 1 º y 25);** es además un derecho social, que como tal tiene unos contenidos mínimos, que son de aplicación inmediata y deben ser protegidos siempre por el Estado, e igualmente es, como todo derecho social, un derecho de desarrollo progresivo. Pero **igualmente existe la obligación del Estado de garantizar no sólo esos mínimos constitucionales sino también de desarrollar progresivamente la protección del trabajo, a fin de lograr la plena realización de ese derecho.**

En armonía con la jurisprudencia y la doctrina internacional, la Corte Suprema de Justicia ha dicho sobre el tema en varias oportunidades que el mandato de progresividad en materia de derechos sociales no tiene un contenido puramente retórico ni debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en la protección de esos derechos, ya que tiene implicaciones jurídicas específicas, destinadas a lograr una sociedad más justa, que logre erradicar las injusticias presentes, tal y como lo ordena el artículo 13 superior. En particular, el mandato de progresividad implica que el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de esos derechos.

[...]

De ahí que el Decreto 3131 de 2005 y los que lo han reglamentado, se hayan integrado debidamente al régimen salarial de sus destinatarios, que son los servidores a quienes señala el artículo 1 º de dicha normatividad, entre ellos los Jueces de Circuito y los Penales de Circuito Especializados, cargo asignado al actor en este proceso.

Lo que ha sido objeto de discusión, que ahora zanja la Sala para el caso presente, es su no consideración de "carácter salarial", como ya se ha expresado. Y es con fundamento en lo expuesto sobre la vigencia de los Tratados Internacionales sobre la materia, que decide la inaplicación de este aparte de la norma por su contradicción con la esencia del concepto de Salario.



[...]

Conducen las anteriores reflexiones a inaplicar por inconstitucionalidad en tanto se apartan de los tratados internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad en materia laboral, los apartes de los artículos 1º y 2º del Decreto 3131 de 2005 que determinaron que la bonificación por actividad judicial no tiene carácter salarial, disposiciones que además riñen con los criterios establecidos en la ley 4ª de 1992. Y ello tendrá sus efectos en la vigencia parcial de las resoluciones objeto de impugnación y como consecuencia, en la condena proferida en primera instancia. No son pues ni la desviación de poder ni la falsa motivación invocadas por la parte actora, los fundamentos que cimientan esta decisión [...]"

Acorde con lo expuesto y sin que sea necesario ahondar en mayores elucubraciones, considera este mandatario judicial que, en virtud de la normatividad vigente de orden interno, así como los tratados internacionales ratificados por Colombia, no queda camino diferente a la Rama Judicial que acoger las pretensiones esbozadas en este escrito.

4. Anexos

- 4.1. Poder otorgado por la reclamante a la sociedad apoderada.
- 4.2. Certificado de existencia y representación legal de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S. con NIT. 900.998.405-7.

5. Notificaciones

Las recibiré en la carrera 12 bis 8 45 sector circunvalar, Pereira - Risaralda, teléfonos: (6) 3211812 - 3174364677. Correo electrónico: notificaciones@legalgroup.com.co

La dirección de correo electrónico señalada, es la registrada por la persona jurídica que represento como dirección para notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación legal, de igual manera esta dirección se encuentra debidamente inscrita en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA- de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, como correo electrónico del suscrito apoderado.

Atentamente,

JONATHAN VELÁSQUEZ SEPÚLVEDA

Representante legal de Legalgroup Especialistas en Derecho S.A.S

Cédula de ciudadanía 1.116.238.813

Tarjeta profesional 199.083 del Consejo Superior de la Judicatura

Proyectó: COQ